

# Pobreza energética

## Un problema de salud pública

El reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que señala que la inacción climática de los gobiernos vulnera el derecho a la vida, debe servir para que todos **los gobiernos refuercen** no solo sus **políticas de reducción de emisiones**, sino también la **protección de la salud** y las soluciones que permitan vivir dignamente bajo las condiciones climáticas que se esperan en los próximos años.

En este sentido, **España** lidera en la Unión Europea el grupo de gobiernos que apuesta por acelerar el avance hacia la **neutralidad climática**. Sin embargo, aún quedan cosas que se pueden hacer para que esas grandes cifras de reducción de emisiones **mejoren las condiciones de vida de** los hogares con **menores rentas** y se conviertan en una herramienta de **cohesión social**.

La **crisis de precios de la energía** ha disparado el número de personas consumidoras vulnerables que se han acogido al **bono social**. Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles, esta solución, además de no atajar las causas estructurales de la pobreza energética, **no llega a todas las personas** consumidoras **que podrían beneficiarse** de él. De hecho, apenas el 8,3% de los hogares está acogido al bono social eléctrico; frente al 14,3% que señala tener dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, de acuerdo con datos de Eurostat y de la encuesta elaborada por CECU sobre acceso a la eficiencia energética de las personas consumidoras en España.




**Apenas el 8,3% de los hogares está acogido al bono social eléctrico; frente al 14,3% que señala tener dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada**

**La pobreza energética tiene efectos directos sobre la salud: agrava el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y respiratorias y problemas de salud mental.**



La **pobreza energética** va mucho más allá de la mera dificultad para pagar las facturas de suministros: **tiene efectos directos sobre la salud**. Agrava el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de problemas de salud mental. La ansiedad y el estrés crónico tienen efectos sobre el desarrollo de enfermedades y puede duplicar las tasas de mortalidad. Nuestra capacidad económica no puede ser un factor de desigualdad en las condiciones de salud y, como sociedad, no debemos permitir que esto ocurra.

Es, además, **indicador de exclusión social y un factor de desigualdad social**. Si queremos que la transición ecológica sea socialmente justa, pero al mismo tiempo atienda a la necesaria aceleración del proceso ante la emergencia climática, debemos abordar la desigualdad como un factor de éxito, ya que supone un sobrecoste que no podemos permitirnos, tanto en gasto sanitario como en sobreconsumo energético. Actualmente, **la urgencia en la transición** ya no es solo una cuestión medioambiental, sino un imperativo económico, debido a la inflación causada por la situación de crisis energética, económica y social en la que estamos inmersos.



Por todo ello, desde CECU planteamos al gobierno una serie de **demandas** para que las **soluciones a la pobreza energética** se hagan uniendo los factores económicos, sanitarios y medioambientales. En concreto, solicitamos:

→ **La extensión a todo el territorio y de manera permanente de la prohibición de interrupción de suministros por impago**, para que, como ya ocurre en Cataluña, las empresas distribuidoras no puedan interrumpir el suministro a personas consumidoras en riesgo de exclusión residencial sin solicitar previamente un informe a los servicios sociales.

→ **Que la eficiencia energética se incluya entre los criterios de habitabilidad de las viviendas en alquiler** y evitar que sea considerada como un factor que permita encarecer aún más los precios del alquiler.

→ **Que se favorezca la formación y participación de las personas consumidoras**, en especial de las más vulnerables, **en la gestión de su demanda energética y en la autoproducción de energía renovable**, a través de la mejora del sistema de los contadores inteligentes o la figura de las comunidades energéticas locales.

El momento actual, en el que se debe actualizar la **Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética**, proporciona un marco idóneo para afianzar logros y reforzar los compromisos y la voluntad política para acabar con esta lacra para los próximos años.

***La prohibición de cortes de suministros de forma permanente, la incorporación de la eficiencia energética como criterio de habitabilidad y el fomento de la participación de las personas consumidoras en la gestión de su demanda energética son claves para hacer frente a la pobreza energética.***